



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

El secreto de las comunicaciones

Autor/es

ÓSCAR ALEXANDER TIPAN GUALOTUÑA

Director/es

MARÍA AMELIA PASCUAL MEDRANO y RICARDO LUIS CHUECA RODRÍGUEZ
,

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2018-19



El secreto de las comunicaciones, de ÓSCAR ALEXANDER TIPAN GUALOTUÑA (publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

GRADO EN DERECHO

EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES (ART. 18.3CE).

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Curso académico: 2018-2019

Alumno

Oscar Alexander Tipán Gualotuña

Tutores

María Amelia Pascual Medrano

Ricardo Luis Chueca Rodríguez

RESUMEN

La Constitución Española de 1978 reconoce en el artículo 18.3 el derecho al secreto de las comunicaciones, como una garantía sobre uno de los aspectos esenciales de la vida privada: libertad de relacionarse con una u otras personas distantes a través de un medio destinado al efecto. Sin embargo, se reconoce la posibilidad de ciertas injerencias legítimas por medio de una resolución judicial constitucionalmente conforme, configurando así la interceptación de las comunicaciones como una eventualidad posible en ciertos casos.

Este trabajo analiza el objeto y el contenido de este derecho fundamental como también el proceso de una intervención judicial. La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, como es el caso de la telefonía, abren un enorme campo de posibilidades y con ello la necesidad de una regulación adaptada a esa garantía protectora. En el trabajo se evidencian los esfuerzos, tanto del legislador como del Tribunal Constitucional, para llenar esas lagunas de una Ley de Enjuiciamiento Criminal propia del siglo XIX y que ha sido objeto de varias reformas para adaptarse a la nueva realidad social.

ABSTRACT

The Spanish Constitution of 1978 recognizes the right to the secrecy of communications, as a guarantee on one of the essential aspects of private life, freedom of communication with different people through a technical artifice. However, the possibility of certain legitimate interference is recognized by means of a constitutionally conforming judicial resolution, thus configuring the interception of communications as a possible eventuality in certain cases.

This work analyzes the object and content of this fundamental right as well as the process of judicial intervention. The evolution of information and communication technologies, such as telephony, opens up an enormous field of possibilities and with it a need for regulation that is adapted to achieve compliance with that protective purpose. The work deals with the activity of the legislator and the constitutional court to regulate a the Criminal Procedure Law of the XIXth to adapt to the new social reality.

TABLA DE ABREVIATURAS.

CE	Constitución Española 1978
DRAE	Diccionario de la Real Academia Española
LECRIM	Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
LOMLECrim	Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica
LO	Ley Orgánica
TC	Tribunal Constitucional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
I.DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.....	8
1. Objeto del derecho	8
a. Concepto de comunicación	8
b. Concepto de secreto.....	10
2. Contenido del derecho.....	12
II.INTERVENCIÓN JUDICIAL.....	16
1. Principios rectores.....	16
2. Procedimiento de intervención.....	17
a. Previsión legal y sus requisitos	17
b. La función del Juez.....	20
c. La resolución judicial: requisitos para la autorización judicial previa.....	22
Motivación	22
3. El secreto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías.....	26
III.INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y DE LAS CONVERSACIONES.....	28
IV.INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES: EL CASO DEL TELÉFONO MÓVIL	32
CONCLUSIONES.....	35
BIBLIOGRAFÍA.....	37
JURISPRUDENCIA CITADA.....	38

INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones a través de artificios técnicos son prácticamente recientes, pero a lo largo de la historia han existido otros medios no tan sofisticados que, en su momento, fueron una herramienta indispensable para la comunicación entre personas distantes. El correo ha sido uno de los medios más tradicionales que ha perdurado en el tiempo y que aún sigue siendo útil en la actualidad. Las fuentes romanas nos remiten a la existencia de intercambios postales e incluso dan noticia de actividades que vulneraban la privacidad de esas relaciones: la “perlustración” o indagación y lectura de los contenidos de las misivas¹.

No es hasta los comienzos de la Edad Contemporánea, con la Revolución Francesa de 1789 que, en teoría, se declaró la inviolabilidad de la correspondencia.

Históricamente, en España cabe destacar el artículo 7 de la Constitución de 1869, que prohíbe a las autoridades gubernativas la “detención y apertura” de la correspondencia como también, la detención de telegramas. Sin embargo, el mismo artículo señala que por medio de una autorización judicial podrán intervenirse ambos. Por su parte, la Constitución de 1876 es menos garantista prohibiendo sólo la apertura de la correspondencia, sin nombrar la intervención telegráfica, y a su vez exigiendo un auto judicial motivado para aquélla. El proyecto de la Dictadura de Primo de Rivera, de 6 de julio de 1929, garantizaba también las comunicaciones escritas. Posteriormente la Constitución de 1931 en su artículo 32, declara la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, salvo “que se dicte un auto judicial”. De hecho, el actual artículo 18.3 CE es parecido, aunque incorporando medios de comunicación más generales.

Como derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (artículo 12) y en algunos tratados internacionales ratificado por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (artículo 17), o el Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950, para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 8). En principio, estos textos hacen referencia a la correspondencia, pero debe entenderse en un sentido amplio según jurisprudencia constante del TEDH. Según el artículo 7 de la

¹ Enrique Belda Pérez-Pedrero, “El derecho al secreto de las comunicaciones”, *Parlamento y Constitución*, núm. 2, Castilla-La mancha, 1998, p. 171.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y del secreto de las comunicaciones”.

El derecho al secreto de las comunicaciones garantiza la libertad de las comunicaciones y su confidencialidad por medio de un medio técnico. Dicha protección dependerá del tiempo que dure ese “proceso de comunicación”. El fundamento de su carácter autónomo y reconocimiento diferenciado respecto de otros, reside en la especial vulnerabilidad de estas comunicaciones en la medida en que es posible intervenirlas por un tercero ajeno a ella².

Ahora bien, será necesario precisar qué ámbitos de la realidad, comportamientos y sectores del ordenamiento han sido seleccionados por la CE. Es por tanto necesario realizar una interpretación del precepto y determinar el objeto de este derecho fundamental como también su contenido y sus límites, ya sean internos o externos.

El secreto de las comunicaciones está limitado en casos excepcionales y sujeto a normas legales de especial rango. La finalidad de las medidas limitadoras es la prevención y persecución de los posibles delitos, así como razones de seguridad pública. El establecimiento de una resolución judicial es un requisito imprescindible para el control de una comunicación (telefónica, grabaciones o escuchas). La protección de las comunicaciones está amparada, como todo derecho fundamental, por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y en su caso, en amparo por el Tribunal Constitucional.

Hoy en día, los avances tecnológicos y la proliferación de mecanismos a través de los cuales es posible acceder a una comunicación han adquirido una gran trascendencia, desplazando la importancia de medios tradicionales, especialmente el correo y los telegramas que son ya parte de la historia. En las últimas décadas, la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con gente es cada vez más accesible incluso con gente que se encuentra en cualquier lugar del planeta. Se abre así una puerta a nuevos sistemas de comunicación como el correo electrónico, el SMS, videoconferencias, redes sociales, etc.³

² STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5.

³ Lori Lewis y Chadd Callahan, expertos de la compañía analítica *Cumulus Media*, han fijado para 2018 el flujo de datos de comunicación en Internet, para cada sesenta segundos, en 18 millones de SMS, 38 millones de mensajes en Whatsapp y 187 millones de correos electrónicos, repito, por cada sesenta segundos. <https://www.bbva.com/es/cuantos-whatsapp-envian-minuto/>. (a. 28-5-2019).

Las comunicaciones a través de un teléfono móvil siguen siendo la opción más accesible para comunicarse en la actualidad; pero también la más susceptible de intervención.

Para una intervención judicial será imprescindible una autorización judicial suficientemente motivada, elemento imprescindible teniendo en cuenta que es el soporte para que puedan conocerse los requisitos y circunstancias por las que resulta admisible la injerencia en el derecho fundamental. Por ende, el requisito de motivación no puede entenderse cumplido por una mera argumentación formal en la resolución judicial, sino que debe ceñirse a unos ciertos parámetros establecidos por la Ley.

Finalmente, señalaremos que las diversas reformas que ha tenido la LECrim son muestra de esa falta de garantías, al no preverse con detalle la extensión y modalidades del poder de apreciación de los poderes públicos para adoptar tales medidas.

I. EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

1. Objeto del derecho

El objeto de un derecho fundamental tiene su origen en la norma suprema que recoge ámbitos de la realidad, que previamente han sido seleccionados, para elevarlos de ser meras expectativas a dotarlos de un rango constitucional.

El derecho fundamental es una garantía de posibilidades que encajan dentro de su objeto, el cual está definido en el enunciado constitucional que se encuentra al servicio de su titular para defenderlo frente a terceros. El derecho reconocido en el artículo 18.3 CE tiene así como objetivo singular proteger la libertad de comunicaciones que se llevan a cabo por un medio técnico con sus respectivas excepciones.⁴

“Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”

a. Concepto de comunicación

Para poder delimitar el objeto *iusfundamental* del art. 18.3 CE, el primer término a estudiar es el de comunicación.

¿Qué es una comunicación? En términos constitucionales es un procedimiento de relación entre personas (emisor y receptor), donde se transmite información, protegido frente a cualquier tipo de interceptación que suponga una retención o suspensión del curso de la comunicación o el conocimiento de un tercero, cabe señalar que el objeto de tutela es el proceso de la comunicación con independencia de su contenido. Es fundamental diferenciar que las comunicaciones que no se realicen por un medio no técnico están fuera de este ámbito como son las conversaciones vis a vis.

La protección constitucional del art 18.3 CE se proyecta sobre el proceso de comunicación que se realicen a través de un artificio técnico, tanto si trata de una comunicación referida a aspectos íntimos como irrelevantes.

En la comunicación pueden entenderse incluidos todos los medios de comunicación, desde los tradicionales postales, telegráficos, telefónicos, hasta los nuevos artificios técnicos, consecuencia del avance tecnológico, (chats,

⁴ Zoco Zabala, Cristina, *Nuevas tecnologías y control de las comunicaciones*, Navarra, 2015 pág. 15.

videoconferencias web conferencias, mensajes de correo electrónico, mensajes de móvil etc.). Queda claro que no existe una lista cerrada ya que la tecnología sigue su marcha donde el Derecho intenta no dejar lagunas jurídicas.⁵

Como hemos dicho, el objeto de este derecho protege un proceso de comunicación, siempre y cuando se realice a través de un instrumento de transmisión⁶. Debe existir una distancia real y, a su vez, producirse por un canal cerrado, es decir, que de un terminal a otro no existan más involucrados que los que participan en la comunicación. En caso contrario no tiene cabida la aplicación del artículo 18.3 CE: no existiría la expectativa de secreto.

No obstante, es necesario que la comunicación se lleve a cabo por un medio de comunicación de cualquier tipo, donde el emisor y el receptor puedan intercambiar información: telégrafo, correo electrónico, chats, teléfono u otros medios que utilizan sus redes. No es objeto de protección aquellas comunicaciones donde el receptor adopta una posición pasiva, sin posible respuesta: radio y televisión.

Por su parte, la distancia entre los interlocutores es indispensable para optar a la protección de este derecho, ya que quiere decir que los sujetos se encuentran físicamente separados y por tanto exista una imposibilidad de hablar en persona. Esto indica, que una conversación persona a persona es objeto de protección del art 18.1 CE. Para que exista una comunicación propia del art 18.3 CE ha de existir un medio de transmisión distinto las palabras o gestos que se pueden percibir directamente con los interlocutores.

Cuando el Tribunal Constitucional hace referencia a medios o canales cerrados, alude a una comunicación emisor-receptor sin interferencia de terceros a través de un instrumento de comunicación, donde los comunicantes gozan de una privacidad amparada por el art 18.3 CE⁷. El Alto tribunal emplea este término para diferenciarlo de la comunicación abierta, esto es, no secreto. Los comunicantes no pueden tener garantizada la confidencialidad de una comunicación cuando el canal por el que se emite el mensaje deja de ser secreto.

La comunicación es un proceso de relación entre personas que está protegida frente a cualquier interceptación, por lo tanto quedan fuera de este ámbito del derecho aquellas situaciones que se sitúan al margen de ella (el antes y después de la

⁵ STC 123/2002, de 3 de abril.

⁶ STC 123/2002, de 11 de marzo.

⁷ STC 170/2013, de 7 de octubre.

comunicación). Una vez concluida la comunicación y en el caso de que la información se hubiera documentado puede ser objeto de protección, pero no dentro del ratio del 18.3CE sino de otro tipo de supuestos como son la intimidad o la misma propiedad privada.

La vida de este derecho nace, en suma, cuando se inicia la comunicación y muere cuando esta finaliza. La protección constitucional desaparece una vez terminado el proceso de comunicación. Aquí surge una cuestión ¿qué ocurre si uno de los partícipes revela la información? Entre los comunicantes no existe un deber de secreto; en todo caso podría existir un deber de reserva, que se proyectaría sobre el contenido mismo de lo comunicado, pero que estaría relacionado con el art 18.1 CE.⁸

En resumen, solo es comunicación para los efectos de este derecho fundamental aquella que se desarrolla a través de un determinado instrumento de comunicación, quedando así excluidas las conversaciones en directo. El artículo 18.3 CE crea una obligación de no hacer para poderes públicos y particulares, protegiendo la información transmitida entre los comunicantes, y a la que solo puede accederse por medio de una resolución judicial motivada.

En resumen, el secreto de las comunicaciones tiene como objeto garantizar la libertad de las comunicaciones, comprendida como proceso de transmisión de pensamientos, ideas, opiniones, o datos adjuntos a las comunicaciones a través de un medio técnico libre de la intromisión de terceros⁹.

b. Concepto de secreto.

Según el DRAE se refiere a aquello que se tiene reservado y oculto: se reserva respecto de un número de personas y se oculta a las demás. El emisor emplea un instrumento de transmisión a fin de que dicha información llegue a un determinado receptor.

La protección constitucional del 18.3 CE se concreta en la afirmación de su secreto, es decir, en el deber negativo de los poderes públicos de no interferir ni revelar el contenido de las comunicaciones. Es necesario destacar que el secreto dispuesto en la norma constitucional es un atributo jurídico propio de la comunicación

⁸ STC 114/1984 de 19 de noviembre.

⁹ Díez Picazo, *Sistema de derechos fundamentales*, Pamplona, 2005 p.313.

y no de su contenido, de tal manera que la protección se extiende sobre toda aquella información transmitida aún cuando no se entre en la esfera de la intimidad¹⁰.

Ahora bien, es cierto que el secreto de comunicaciones puede estar relacionado con la intimidad, pero su ámbito de protección posee un contenido más amplio que se proyecta sobre el proceso de comunicación, es decir, que el contenido del mensaje transmitido goza de exclusiva protección sin importar que pertenezca al ámbito personal, íntimo o lo reservado. Se busca garantizar el derecho a transmitir libremente el pensamiento y hacerlo llegar sin interferencias a quien, también libremente, elija como destinatario¹¹.

Se crea un espacio protegido, un canal cerrado donde se produce una expectativa de secreto. Existen comunicaciones donde se emplea un canal abierto (radio, televisión) que tiene como objetivo tener la máxima difusión posible y no precisamente existe una expectativa de secreto.

Lejos de los clásicos ejemplos vamos a poner uno más común hoy en día como es el caso de los videos en directo (Facebook o Instagram), son formas de comunicación en abierto a través de internet, son comunicaciones que se encuentran fuera del artículo 18.3 CE por la carencia de un canal cerrado y por tanto ausencia de expectativa de secreto.

El secreto de comunicaciones crea una obligación de no hacer para los poderes públicos: no intervenir las comunicaciones privadas¹². Salvo justificación constitucional, nadie tiene el deber de soportar la inmisión del Estado en su domicilio o en sus comunicaciones como es el caso¹³. No obstante, si se produce una lesión al derecho del 18.3 CE lo decisivo no es el contenido de la información, sino el hecho de que un tercero, sin autorización ajeno al proceso de comunicación intervenga o revele su contenido¹⁴.

¹⁰ Jiménez Campo, "La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, Madrid, 1987 p. 45-48

¹¹ STS 130/2007, de 19 de febrero.

¹² Bastida, Francisco, *Teoría General de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978*, Madrid, 2004 p. 93

¹³ Bastida, Francisco, *Teoría General...*, ob. cit., p. 94.

¹⁴ STC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ 3.

Cabe ha señalado el TC en repetidas ocasiones, *“el secreto se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado”* (SSTC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ. 7; 34/1996, de 11 de marzo, FJ. 4; o 70/2002, de 3 abril, FJ. 9).

En suma, toda comunicación no es necesariamente íntima, pero sí secreta, es decir, la protección constitucional del 18.3 CE se activa cuando hay un proceso de comunicación. La lesión del derecho se produce por el descubrimiento ilegítimo de información, independientemente de cuál sea su contenido, insignificante o de vital importancia.

Además, la garantía del secreto protege no sólo la información transmitida, sino también los diversos aspectos de comunicación. Señaladamente, la identidad subjetiva de los interlocutores¹⁵.

En definitiva, el artículo 18.3 CE consagra la libertad de las comunicaciones, tácitamente y de manera literal, su secreto, estableciendo un deber de “no hacer” por parte de los poderes públicos ni de los particulares. En esta línea, Tribunal Constitucional afirma que *“el fundamento del carácter autónomo y separado del reconocimiento de este derecho fundamental y de su específica protección constitucional reside en la especial vulnerabilidad de la confidencialidad de estas comunicaciones en la medida en que son posibilitadas mediante la intermediación técnica de un tercero ajeno a la comunicación”*. (STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ. 5.)

2. Contenido del derecho.

El contenido de un derecho fundamental es el poder o conjunto de deberes jurídicos, concebidos como facultades a los titulares. Éstos pueden ejercer frente a terceros el permiso o la prohibición *iusfundamental* garantizadas en cada derecho fundamental¹⁶.

A esta dimensión del derecho fundamental se denomina contenido subjetivo, el precepto constitucional 18.3 CE origina un derecho exigible, de tal manera que garantiza la libertad de las comunicaciones, libre de la intromisión de terceros, es decir, posee eficacia “erga omnes” directa frente los poderes públicos, como también contra los particulares.

¹⁵ STC 114/1984, de 29 de noviembre.

¹⁶ Bastida, Francisco, *Teoría General...*, ob. cit., p. 94.

¿Cuál es, en consecuencia, el contenido *iusfundamental* del secreto de las comunicaciones? En líneas generales, serían el secreto de las comunicaciones y la posibilidad de intervenirlas siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones¹⁷.

Zoco Zabala nos presenta un doble significado del artículo 18.3 CE positivo y negativo. El positivo sería el derecho inherente a toda persona a utilizar cualquier artificio técnico para comunicarse y transmitir una determinada información. El significado negativo es la posibilidad de la intervención de las comunicaciones mediante una resolución judicial ajustada a la ley. Por lo tanto, se prohíbe filtrar la información que se obtenga de un proceso comunicativo, a menos que, los interlocutores así lo dispongan o por medio de su respectiva resolución judicial motivada que sea constitucionalmente conforme, es decir, que dicha intervención no se puede decidir con fines prospectivos¹⁸.

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿existe derecho a entablar una comunicación? El artículo 18.3 CE protege a quien está dispuesto a usar un instrumento de comunicación y que está siendo obstaculizado para llevarlo a cabo. No se trata de un derecho fundamental genérico a gozar de un medio de comunicación en cada momento¹⁹.

Por lo tanto, el secreto de las comunicaciones consagra la libertad de las comunicaciones tanto de modo implícito como de modo expreso, su secreto. La finalidad de este derecho es de proteger la comunicación y el secreto solo si se dispone de un medio para hacerlo. La propia Constitución Española de 1978, determina que los derechos fundamentales son de aplicación directa (artículo 9.1 CE), goza de una eficacia “erga omnes”, frente a la intromisión de los poderes públicos y particulares²⁰.

El secreto de las comunicaciones protege así un “agere licere” de los ciudadanos libre de la injerencia de los poderes públicos, de toda intervención que suponga una aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o la captación de otra forma del proceso de comunicación, como el simple conocimiento

¹⁷ Zoco Zabala, Cristina, *Nuevas tecnologías...*, ob. cit., pág. 59.

¹⁸ Andrés Ibáñez, P., *La función de las garantías en la actividad probatoria*, Madrid, 2005, p. 215-242.

¹⁹ Enrique Belda Pérez-Pedrero, “El derecho al secreto de las comunicaciones”, *Parlamento y Constitución*, núm. 2, Castilla-La Mancha, 1998, p. 176.

²⁰ Jiménez Campo, J., “La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, 1987, p. 56 a 58.

antijurídico de lo comunicado (la apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinataria)²¹.

La resolución judicial tiene un origen *iusfundamental*, es necesario que la ley determine las condiciones las cuales es preciso delimitar, el contenido del artículo 18.3 CE. La necesidad de un listado detallado de los criterios judiciales de intervención es la muestra de un sistema de principios que garantizan la seguridad e igualdad en la aplicación de normas.

Es importante recordar las funciones del legislador, como intérprete inmediato de la Constitución, consiste en desarrollar el contenido de los derechos fundamentales como también puede configurar la determinación constitucional previa de los demás derechos fundamentales si ello es necesario para garantizar la aplicación efectiva de lo prescrito. Junto a esta labor del legislador se encuentra ligada la función de los Jueces: de aplicar en tiempo, espacio y forma concretos límites que previamente ha creado el legislador, es decir están sujetos a una estricta y rigurosa vinculación positiva a la norma con rango de ley de derechos fundamentales y a su vez bajo su discrecionalidad valorar la necesidad de intervenir empleando otra medida menos lesiva de este derecho fundamental²².

En realidad, la intervención de las comunicaciones supone un límite interno, que en este caso viene dispuesto explícitamente por la Constitución que delimita el objeto del derecho fundamental en cuestión. El límite interno excluye desde el principio la garantía constitucional sin necesidad de que se cree una norma para realizar una exclusión, que es propia de los límites externos²³.

La posibilidad de intervenir las comunicaciones, según la doctrina, se define como un límite en sentido propio, al formar parte de la configuración del derecho mismo. Incluso en casos de supresión de las garantías del derecho fundamental²⁴.

En resumen, la intervención judicial, ya sea definida como límite en sentido propio o como criterio delimitador, tiene que estar motivada de tal manera que las medidas limitadoras han de ser necesarias para conseguir el fin perseguido²⁵.Y en

²¹ STC 230/2007, de 5 noviembre.

²² Bastida, Francisco, *Teoría General de los derechos fundamentales en la Constitucional Española de 1978*, Madrid, 2004 p. 111

²³ Bastida, Francisco, *Teoría General...*, ob. cit., p. 121.

²⁴ Jiménez Campo, J., *Derechos fundamentales. Concepto y garantías*, Trotta, Madrid, 1999, p. 38.

²⁵ STC 13/1985 de 31 de enero.

cuanto, a la autorización judicial es necesario incluirlo dentro del contenido esencial del artículo 18.3 CE, ya que comparten un mismo estatuto jurídico.

La autorización del juez como los criterios son determinantes para llevar a cabo la intervención de las comunicaciones, siempre respaldados por una ley que prevea los requisitos a seguir por parte de los órganos judiciales. Por este motivo ese acto aplicativo requiere una expresa y habilitación legal y, además, debe ser motivado y sometido al principio de proporcionalidad. En palabras del Tribunal Constitucional, *“cualquier restricción en el ejercicio de un derecho fundamental necesita encontrar una causa específica prevista por la ley y que el hecho o la razón que la justifique debe explicarse para hacer cognoscibles los motivos que la legitima”* (STC 177/1998, de 14 de septiembre, FJ. 1.)

II. INTERVENCIÓN JUDICIAL.

1. Principios rectores

La intervención de las comunicaciones de cualquier tipo implica la afectación del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Como se ha explicado, el artículo 18.3 CE busca proteger la confidencialidad de las comunicaciones frente a las injerencias de terceros. No obstante, este derecho no posee una absoluta protección ya que puede ocurrir que en el seno de la investigación judicial se ordene una interceptación de las comunicaciones que deberá ajustarse a los criterios y principios de especialidad, idoneidad, necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida.

El principio de especialidad implica que el auto que autorice la intervención de las comunicaciones especifique los hechos respecto de los cuales se autoriza la injerencia en el secreto de las comunicaciones de la persona objeto de investigación: es una medida puntual y específica que no admite un uso indiscriminado o arbitrario.. Por tanto, de obtenerse indicios fundados de otros hechos delictivos, debería solicitarse nueva autorización judicial para iniciar una nueva investigación. Debe existir una necesaria identidad entre el delito objeto de la investigación y el hecho que se investiga, sin que quepa su uso de forma preventiva o ante la concurrencia de meras sospechas.

El principio de idoneidad exige que la medida de intervención sea la adecuada para lograr el fin perseguido, de manera que, si existen otros medios menos gravosos y también idóneos para conseguir la finalidad perseguida en lugar de una intervención de las comunicaciones ya no sería necesario autorizarla²⁶.

En la aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la medida cuando sea imprescindible, para conseguir el objetivo fijado cuando no estén a disposición de la investigación otras medidas menos gravosas para los derechos del investigado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho o cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho en cuestión, determinación del autor o autores, averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.

Por último, la intervención de las comunicaciones será proporcionada, cuando tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el beneficio que de su adopción resulte para el interés público y terceros debe primar sobre el interés del

²⁶ STC 49/1999, de 5 de abril.

titular del derecho fundamental al derecho de las comunicaciones²⁷. La ponderación dependerá de los intereses en conflicto, la gravedad del hecho, transcendencia social, intensidad de los inicios existentes y la relevancia del objetivo perseguido con la medida interpuesta.

2. Procedimiento de intervención

a. Previsión legal y sus requisitos

Como derecho fundamental del Título I, Capítulo II, sección 1ª, el desarrollo del secreto de las comunicaciones está amparado por una reserva de carácter general, que demanda el rango de Ley Orgánica a toda norma que lo afecte. El artículo 18.3 CE, impone al legislador orgánico una garantía adicional a tener en cuenta en su actuación definidora de los límites del derecho: es necesaria la intervención judicial²⁸.

La resolución judicial posee una naturaleza *iusfundamental*, por lo que es necesario que la ley determine las condiciones del artículo 18.3 CE que es preciso delimitar. Por consiguiente, los criterios judiciales de intervención establecidos en la ley garantizan la seguridad e igualdad de las normas (previsibilidad legal). El propio Tribunal Constitucional ha señalado que *“toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas precisa una habilitación legal”* (STC 49/1999, de 5 de abril; 184/2003, de 23 de octubre.)

La previsión legal viene determinada por el Convenio de Roma como también por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De modo, que este requisito está compuesto por otros tres elementos: la existencia de una base en el derecho interno; la accesibilidad de la ley para la persona implicada y la previsibilidad de la ley en cuanto al sentido y la naturaleza de las medidas aplicables²⁹. Por ello se hace necesario que la ley sea clara para indicar en qué condiciones y bajo qué circunstancias los poderes públicos pueden llevar a cabo esta medida

El Tribunal de Estrasburgo ha venido recalcando que la previsibilidad de la ley es fundamental y que debe ajustarse al Convenio ya que en varias ocasiones ha señalado que la Ley de enjuiciamiento Criminal Española no brinda las suficientes garantías que

²⁷ STC 123/1997, de 1 de julio.

²⁸ Enrique Belda Pérez-Pedrero, “El derecho al secreto de las comunicaciones”, *Parlamento y Constitución*, núm. 2, Castilla-La Mancha, 1998, p. 190-191.

²⁹ STEDH del 24 de abril de 1990, caso *Kruslin* contra Francia

precisan la extensión y las modalidades del ejercicio del poder apreciación de las autoridades³⁰.

EL artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que es necesaria una previsión legal de las condiciones que el Juez tiene que motivar para interceptar las comunicaciones, de manera que no basta con que una autorización confirme la intervención de las comunicaciones, pues esta debe tener su fundamento en los criterios delimitados por la Constitución³¹.

Por su parte, el poder legislativo tiene como función desarrollar los criterios que permitan autorizar una intervención de las comunicaciones conforme a la Constitución, de tal manera, que el órgano jurisdiccional tendrá a su disposición el mayor conocimiento posible de los criterios legales que delimitan el contenido del artículo 18.3 CE.

En suma, la habilitación legal debe tener su base en el derecho interno, y a su vez, ser accesible y previsible y ofrecer una garantía a los ciudadanos sobre las posibles consecuencias que se pueden derivar de su comportamiento³². Debido a esas lagunas normativas el Tribunal Constitucional se vio obligado a suplirlas desarrollando criterios, que el órgano jurisdiccional debía implementar para que la resolución judicial se encuentre suficientemente argumentada con base en los criterios desarrollados por la jurisprudencia³³.

³⁰ Asunto Valenzuela Contreras contra España; el TEDH, valorando unos acontecimientos del año 1985, sobre todo relacionado por el entonces artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Posteriormente el TEDH volvió a pronunciarse sobre la reforma de la Ley Orgánica 4/1988, Caso Prado, afirmaba que las reformas introducidas no responden a la Jurisprudencia del TEDH para evitar abusos y que *«lo mismo ocurre con la naturaleza de las infracciones que pueden dar lugar a las escuchas, con la fijación de un límite a la duración de la ejecución de la medida, y con las condiciones de establecimiento de las actas de síntesis que consignan las conversaciones intervenidas, tarea que se deja a la competencia del secretario judicial»*. Enrique Belda Pérez-Pedrero, *“El derecho al secreto de las comunicaciones”*, ob.cit., p. 166-167.

³¹ En el ámbito internacional, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y el artículo 17 del Pacto de derechos civiles y Políticos de 1966 afirman la necesaria introducción de una previsibilidad legislativa de los requisitos para intervenir la correspondencia. Aunque estos textos se encuentren un poco desfasados en el tiempo, la protección del secreto de las comunicaciones se proyecta sobre otras formas de comunicaciones, y de manera especial en las comunicaciones. Elvira Perales, A., *El secreto de las comunicaciones*, Iustel, Madrid, 2007, p.24.

³² Zoco Zabala, C., *La intervención judicial de las comunicaciones ¿Privadas?*, Pamplona, 2014, p.79 y ss.

³³ STC 253/2006, de 11 de septiembre.

Según el artículo 8.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales Humanos y las libertades Fundamentales *“No podrá haber injerencias de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad, pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o por la protección de los derechos y las libertades de los demás.”*

Este precepto es trascendental ya que nos señala cuando una intervención puede ejecutarse atendiendo a los fines y objetivos previstos en la Ley como son: seguridad nacional, la seguridad pública protección de derechos y libertades etc.

Entre estos fines destaca el de la persecución de los delitos. La jurisprudencia la restringe a la investigación de una infracción grave, que surge mayoritariamente en el ámbito de los procesos penales, de modo, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que soporta normalmente el requisito de previsibilidad legal.

Por otra parte, la interceptación de las comunicaciones puede resultar admisible en otro ámbito previsto por la ley como pueden ser el artículo 51 LOGP Y 41 y ss del Reglamento Penitenciario, que trata de los supuestos de restricciones, suspensiones o intervenciones en las comunicaciones de los reclusos, que bien podrían ajustarse a los objetivos de seguridad pública, defensa del orden o protección de los derechos de los demás³⁴.

El Convenio de Roma, como hemos señalado anteriormente, requiere que las medidas de intervención de las comunicaciones sean propias de una sociedad democrática. Esto implica tres requisitos: Idoneidad, necesidad estricta o en sentido propio y proporcionalidad.

Idoneidad, en el sentido de que la medida se ajuste al fin u objetivo legítimo perseguido; necesidad de encontrar una medida que suponga una menor injerencia en el derecho y conduzca a la misma finalidad y, finalmente, que el sacrificio del derecho vulnerado sea proporcional al fin perseguido.

El Tribunal Constitucional emplea la proporcionalidad cuando supone un sacrificio del derecho fundamental estrictamente necesario, y existe proporción entre la medida y el sacrificio. No obstante también emplea el requisito de proporcionalidad como un añadido al de necesidad o, también tiende a englobar los requisitos

³⁴ Díaz Revorio, F., “El derecho fundamental de las comunicaciones”, *Revista de la Facultad de Derecho*, núm. 59, 2006, p, 165-172.

(finalidad, idoneidad y necesidad) como así, lo entiende en las *STC 49/1999, de 5 de abril, FJ. 8; 299/2000, de 11 de diciembre FJ. 2; 184/2003, de 23 de octubre, FJ. 9. "la autorización se dirige a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como acontece en los casos en que se adopta para la investigación de la comisión de delitos calificables como graves y es idónea e imprescindible para la determinación de hechos relevantes para la misma"*.

b. La función del Juez

El secreto de las comunicaciones constituye un derecho de carácter formal por cuanto protege el proceso de la intervención, con independencia de que el contenido de la comunicación sea íntimo o no: garantiza la opacidad de la comunicación, a menos que la información sea difundida por uno de los interlocutores.

La intervención judicial tiene un fundamento formal, ya que protege la correcta motivación judicial previa a la intervención con independencia de que lo comunicado pertenezca o no a la vida privada, según dejamos ya dicho³⁵.

El artículo 18.3 CE blinda el proceso previo a la intervención de las comunicaciones por un tercero ajeno a la comunicación que se efectúa por un medio técnico, bien sea para evitar su intromisión antijurídica, o bien para garantizar la constitucionalidad del proceso de intervención. Es importante destacar, que el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones no es una herramienta dirigida primariamente a proteger la vida privada de las personas y otros derechos semejantes. Por lo tanto, la protección del artículo 18.3 CE se extiende a lo largo del proceso de la comunicación, pero una vez finalizado, la protección constitucional queda tutelada por su respectiva norma constitucional.

El artículo 18.3 CE delimita el contenido del secreto de las comunicaciones, ya que permite interceptarlas cuando exista una resolución judicial motivada, y su vez, pueda conducir como diligencia instructora a la obtención de prueba (aprehensión de correspondencia, grabación de una conversación telefónica).. No obstante, dicha interceptación no debe constituirse como una actuación probatoria La LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (LOMLECrim) pretende completar las lagunas reguladoras tanto del proceso previo de interceptación judicial como de los criterios que el Juez tiene que seguir para interceptar las comunicaciones para garantizar la correcta delimitación del artículo 18.3 CE.

³⁵ STS 301/2013, de 18 de abril.

Inicialmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han intentado suplir la ausencia de un concepto de “sospechas objetivas” que no lo incluye el antiguo art 579 LECrim, limitándose únicamente a determinar que la intervención judicial tenía que fundarse en la existencia de indicios o sospechas para la comprobación de un hecho o circunstancia importante para la causa.

La LOMLECrim afirma que la solicitud de autorización judicial puede ser presentada por el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial y el Juez ser, por tanto, el encargado de confirmar dicha autorización de forma motivada. Deberá constar la identificación del número del terminal o etiqueta técnica; identificación de la conexión objeto de la intervención; o los datos necesarios para identificar el medio de comunicación que se trate (art 588 ter. d. 1)

Además, se incluye que la solicitud de autorización judicial pueda tener por objeto alguno de los siguientes datos con el objetivo de determinar la extensión de la medida: registro y grabación del contenido de las comunicación, con indicación de la forma o tipo de comunicaciones afectadas, el conocimiento de su origen o destino en el momento en el que las comunicación se realiza, la localización geográfica del origen y destino de las comunicación y el conocimientos de otro datos de trafico de valor añadido a la comunicación.

Debido a la última reforma por primera vez se delimitan los delitos graves por cuyas sospechas es posible intervenir cualquier tipo de comunicación, por lo tanto, la resolución judicial de intervención podrá ser concedida cuando en la investigación existan delitos doloso castigados con pena de tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo criminal u organización criminal o terrorismo (artículo 579.1 LOMLECrim)

El secreto de las comunicaciones defiende la libertad de éstas siempre y cuando se realicen por un medio técnico por lo que se prohíbe toda intervención ya sea de poderes públicos y particulares, y su vez, permite la interceptación precedida de una resolución judicial, fundada en sospechas objetivas de la presunta comisión de un delito, susceptible de ser intervenido, por parte del sospechoso³⁶.

Según Zoco Zabala la interceptación de las comunicaciones no se puede definir con fines meramente prospectivos, es decir, deben existir sospechas objetivas de un delito; no obstante, el afectado por la intervención no tiene por qué estar imputado, ni haberse procedido a la apertura de procedimiento contra dicho interceptado o tercero

³⁶ P. Andrés Ibáñez, *La función de las garantías en la actividad probatoria*, Madrid, 1993, p. 220-228.

relacionado contra él, pues no se requiere la existencia de indicios razonables de su presunta culpabilidad³⁷. De hecho, la intervención de las comunicaciones persigue la obtención de pruebas el proceso de instrucción contra el intervenido, o dependiendo del caso, de un tercero relacionado con él.

c. La resolución judicial: requisitos para la autorización judicial previa

El artículo 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones con una excepción, la resolución judicial, por lo que es necesaria la intervención del Juez para llevar a cabo una eventual interceptación de las comunicaciones a través de un medio técnico. El Poder judicial actúa como garante de los derechos y como único legitimado para autorizar determinadas injerencias.

El requisito de la resolución judicial, para intervenir una comunicación no puede entenderse cumplido con la mera contrastación del dato formal de la existencia de dicha resolución, sino que la misma debe cumplir determinadas exigencias, para que la injerencia sea legítima y de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo.

Motivación

El desarrollo legislativo del contenido de los derechos fundamentales permite al juez realizar su función con una mayor objetividad, analizando los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional que, como bien indican, requiere que las decisiones judiciales deben estar suficientemente motivadas.

En consecuencia, la argumentación de los fallos judiciales tiene que seguir un entramado normativo donde se expondrán las razones por las cuales el supuesto de hecho cumple o no con los requisitos establecidos para su respectiva interceptación. La exigencia de una motivación de las autorizaciones derivadas de los órganos jurisdiccionales tiene una naturaleza constitucional (artículo 24 CE).

El Tribunal Constitucional asegura que es necesario que las resoluciones judiciales deban constar de una detallada argumentación, para que, al receptor de la misma le sirvan como garantía del artículo 24.1 CE, de lo contrario estaríamos ante

³⁷ Zoco Zabala, C., *La intervención judicial de las comunicaciones ¿Privadas?*, Pamplona, 2014, p.81-90.

decisiones arbitrarias³⁸. Por lo tanto, la obligación de dictar resolución no basta: es necesaria una argumentación que la fundamente³⁹.

La motivación como tal, debe señalar en qué medida el supuesto de hecho se ajusta a las condiciones establecidas en la ley, como también, se debe especificar de qué forma los hechos probados acreditan el cumplimiento de los requisitos de la ley⁴⁰.

Así pues, el órgano jurisdiccional tiene como función seleccionar la norma adecuada para el caso concreto. Al mismo tiempo, tiene que ser adecuado con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito respecto a los hechos que determinan *la causa petendi*⁴¹.

Una detallada argumentación no debe identificarse con términos como “exhaustivo o pormenorizado”. En contadas ocasiones el Tribunal Constitucional ha exigido que el Juez deba exteriorizar el proceso mental que ha llevado a la habilitación de intervención⁴². Sin embargo, es necesario contestar a todas las cuestiones litigiosas precisando el fundamento en que se basa la resolución judicial.

Un auto judicial de intervención de las comunicaciones no es una sentencia sino una decisión incidental previa a la interceptación que en algunos corresponde a la fase probatoria.

La falta de motivación o insuficiente argumentación de la autorización judicial supone la indefensión del ciudadano (artículo 24 CE) ya que el auto judicial debe estar fundado en derecho, el juez debe ceñirse a los requisitos de tal manera que el ciudadano tenga una respuesta razonable y suficiente, sin que ello implique que la argumentación sea pormenorizada⁴³.

³⁸ STC 164/2005, de 20 de junio.

³⁹ STC 87/2000, de 27 de marzo.

⁴⁰ Según el Tribunal Constitucional es necesario que el juez delimite la *ratio decidendi*, pero también una mínima explicitación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se individualiza el caso y se posibilita la aplicación de la norma jurídica. STC 9/201, de 28 de febrero del 2011.

⁴¹ STC 169/2013, de 7 de octubre.

⁴² STC 28 /1994, de 27 de enero.

⁴³ El Tribunal Constitucional considera que no es suficiente con el razonamiento en que se basa la resolución judicial sino que se exige también una argumentación respetuosa con los fines perseguidos por la norma. STC 195/2009, 29 de septiembre; 79/2008 de 14 de julio.

EL Tribunal constitucional no ha establecido diferencias entre los requisitos de la motivación cuando se trate de una sentencia o cuando se trate de un auto. Lo importante es que la motivación de ser suficiente y razonada, esto implica, que la argumentación puede ser breve o concisa siempre y cuando explice la “ratio decidiendi”⁴⁴.

En esta línea la jurisprudencia ha señalado que la motivación debe ser expresa, nunca tacita o supuesta. No obstante, puede integrarse con la solicitud policial, cuando el conjunto resultante cumple todos los requisitos de la motivación.

Por otra parte, la argumentación debe expresar el criterio de proporcionalidad que justifica la intervención para la persecución de un fin legítimo, de manera que solo sea legítimo imponerla cuando no existan medidas alternativas menos lesivas para el disfrute de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe respetarse un equilibrio entre la medida que se adopta y la finalidad perseguida. Como también es imprescindible de precisar el alcance de la medida, en qué términos va a consistir esta, como se llevar a cabo y cuáles serán sus límites.

Por último, en el caso de que la interceptación se acuerde en el curso de un proceso penal, la motivación debe exteriorizar los indicios existentes, así como el delito o delitos que se persiguen y en su caso las personas sobre las que recaen dichos hechos.

Junto al requisito de motivación se exige además:

-Determinación de un plazo, el cual empezará a contar desde la aprobación del auto judicial, no desde su ejecución y efectiva intervención⁴⁵.

-La intervención debe hacer referencia a los indicios que el Juez ha de tener tanto sobre persona como sobre el acaecimiento de los hechos constitutivos de delito⁴⁶.

⁴⁴ STC 77/2008, 7 de julio.

⁴⁵ STC 205/2005, de 18 de junio.

⁴⁶ No es admisible la disociación entre la autorización y la investigación posterior. Tampoco caben las autorizaciones genéricas, ni *“es correcto mantener la intervención cuando se descubre que el nuevo y presunto delito que se dibuja por la telefonía es independiente del que fue objeto de la inicial autorización”*. Auto del TS ,18 de junio.

Una vez terminada la observación o intervención, debe notificarse a los afectados que han sido escuchados o interceptados, las causas y durante cuánto tiempo. En el caso de que se trate de correspondencia debe ser abierta en presencia del sujeto (artículo 584 Lecrim). El afectado podrá pedir la devolución de las grabaciones, copias o documentos intervenidos una vez que haya concluido la intervención.

Después de repasar las exigencias que debe cumplir una resolución judicial cabe preguntarse sobre los supuestos de intervención ilícita de las comunicaciones.

Toda interceptación, ya sea de un poder público o un tercero ajeno a la comunicación, que no cumpla con los requisitos establecidos por la ley, será considerada como ilícita, vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones.

Las consecuencias pueden ser varias: desde una sanción penal hasta la nulidad de cualquier prueba que pudo obtenerse de una interceptación ilegítima⁴⁷. Los derechos fundamentales gozan de inviolabilidad frente a cualquier intromisión de manera que si existe una ilicitud, supondría una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. El afectado puede invocar su derecho a una presunción de inocencia en caso de que se produjera una condena penal basándose en una prueba ilícita⁴⁸.

Ahora bien, es más complejo determinar las consecuencias de esta invalidez en relación con otras pruebas relacionadas con la primera; y sobre otros actos procesales que de alguna manera se vinculan a la prueba obtenida ilícitamente. El Tribunal Constitucional ha sido tajante con estas cuestiones ya que señala que la nulidad de la prueba obtenida ilícitamente acarrea la de aquellas otras que son consecuencias de la misma.

La relación que une a una prueba con otra ilícita se denomina “conexión de antijuridicidad”, de manera que pueden ser excepcionalmente admisibles, aquellas pruebas que, pese a ser fruto de una obtención ilícita son jurídicamente independientes de estas⁴⁹.

⁴⁷ STC 114/1984, de 29 de noviembre; 81/1998, de 2 de abril; 49/1999, del 5 de abril; 299/2000, de 11 de diciembre; 184/2003, de octubre

⁴⁸ STC 49/1999, de 5 de abril.

⁴⁹ STC 86/1995, de 6 de junio; 54/1996 de 26 de marzo; 81/1998, de 2 de abril

3. El secreto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías.

Actualmente, la tecnología ha tenido un impacto determinante en la sociedad, debido a la expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet, como vehículos de comunicación, transmisión e intercambio de información de todo tipo a gran velocidad, ha originado una autentica revolución tecnológica digital.

El uso de las nuevas tecnologías ha arrasado por completo a las tradicionales formas de comunicación, donde el contenido transmitido ya no solo abarca voz, sino, otros soportes y formatos diversos. Hoy en día, las comunicaciones telemáticas o electrónicas son las más empleadas por los usuarios debido a su sencillez y fácil acceso. Los operadores de las diferentes telefonías disponen de una gran base de datos, que permite almacenar información, incluida la localización geográfica de un terminal⁵⁰.

Anteriormente, el acceso a servicios como Internet eran muy escasos y solo unos cuantos podían acceder. Hoy se ha convertido en un servicio indispensable como la luz, el gas etc. Una de las características básicas de Internet es la existencia de barreras mínimas de entrada para la comunicación tanto para emisores como receptores; se trata de un medio abierto a los usuarios, que pueden acceder a la información y los servicios propios de la red en cualquier parte del planeta⁵¹. La fluidez de información y la irrelevancia de la distancia caracterizan las nuevas comunicaciones.

Estos cambios tecnológicos en el ámbito de la telefonía y de las comunicaciones electrónicas suponen un avance positivo para la sociedad, pero ello no impide que su uso pueda derivarse hacia la consecución de fines delictivo, de hecho, la facilidad de acceso en muchas ocasiones ha sido utilizada por la delincuencia organizada con nuevas herramientas aprovechándose de ese fácil acceso. Internet supone además un fácil acceso al anonimato, con consecuencias jurídicas realmente novedosas.

En suma, esta revolución tecnológica impone la necesidad de regular todos estos medios de comunicación y salvaguardar los derechos fundamentales en juego, por ello es necesario que la nueva regulación sea acorde a las actuales formas de transmitir la información.

La LOMLECrim, busca llenar ese vacío normativo, tanto del proceso previo de interceptación como los criterios empleados por los jueces, en el ámbito del derecho fundamental de las comunicaciones. Como novedad principal se introduce el artículo

⁵⁰ Pérez Gil, J., *Los datos sobre la localización geográfica en la investigación penal*, Madrid, 2010, p. 307-353

⁵¹ Llana González, P., *Internet y comunicaciones digitales*, Barcelona, 2000, p. 2007

579 bis sobre a la utilización del resultado de la intervención de la comunicación en otro proceso penal distinto, en particular aquellos hallazgos casuales y la continuación de la medida en aquel otro proceso, para lo que se requería un nuevo auto.

Por otra parte, es necesario destacar los nuevos supuestos objeto de nueva regulación y que anteriormente no lo estaban, reflejo del deseo del legislador de regular estos nuevos ámbitos.

- Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
- Grabación de comunicaciones orales y captación de imágenes mediante dispositivos técnicos.
- Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen.
- Registro de almacenamiento masivo de información y registros remotos de equipos informáticos.

La nueva norma pretende regular bajo un mismo proceso de autorización, los diferentes derechos fundamentales del artículo 18 CE, es decir, encontrar un equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente a los nuevos delitos y su vez garantizar ese espacio de exclusión a los ciudadanos para ejercer su derecho a la “libertad de las comunicaciones”, a través de medio técnico.

III. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y DE LAS CONVERSACIONES.

La intervención de las comunicaciones constituye, como dijimos, un límite interno, ya que viene dispuesto explícitamente por la CE, con ello no se quiere decir que se prive de garantía al objeto del derecho fundamental, sino que ese límite ya fijado se excluye desde un principio de la garantía constitucional⁵².

A partir de ahí es necesario, no obstante, que la ley prevea las condiciones en las que cabe una restricción del contenido del artículo 18.3 CE⁵³. Cuando el texto constitucional prevé que un determinado ámbito de la libertad puede ser afectado por una resolución judicial está creando una “regla competencial” (un fragmento de norma), que habrá que completar a través de una regulación legislativa que presente los supuestos y los procedimientos para el correcto despliegue de la competencia.

Los criterios judiciales de intervención deben así hallarse claramente tasados en una ley (previsibilidad legal). Sólo en los supuestos legales establecidos el juez podrá acordar una intervención. A su vez, el Tribunal Constitucional viene reiterando la necesidad de motivar de un modo suficiente y adecuado la restricción de este derecho.

El juez debe ceñirse a los criterios establecidos previamente para determinar si la autorización es legalmente válida y valorar si existen otros medios probatorios menos lesivos. Las medidas limitadoras han de ser necesarias para conseguir el fin perseguido⁵⁴.

La Constitución Española de 1978 encuadra el secreto de las comunicaciones en su Título Primero, Capítulo II, Sección 1ª por una razón muy clara: a todos los derechos ahí incluidos, se les aplica las garantías de los artículos 53 CE (vincula a todos los poderes públicos, se puede regular solo por ley salvaguardando su contenido esencial); 55 CE (poseen un recurso preferente ante los Tribunales ordinarios con la posibilidad de acudir en amparo ante TC ;se prevé su suspensión individual, con intervención judicial y adecuado control parlamentario) y 81.1 CE (su desarrollo requiere Ley orgánica).

El secreto de las comunicaciones, como hemos visto, se dirige a garantizar su impenetrabilidad por terceros, (posee una eficacia *erga omnes*), ajenos a la

⁵² Bastida Freijedo, F.J.; Villaverde Menéndez, Requejo Rodríguez, P; Prenso Linera, M.A; Aláez Corral, B; Fernández Sarasola, I., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978*, Tecnos, Madrid, 2004, p.106.

⁵³ Zoco Zabala, Cristina, *Nuevas tecnologías...*, ob. cit., p. 62.

⁵⁴ STC 13/1985, de 31 de enero

comunicación emitida por un medio técnico. Los poderes públicos deben cumplir su obligación de abstener de cualquier intromisión, obligación que persistirá mientras no exista una resolución judicial.

El artículo 18.3 CE protege la interceptación de comunicaciones ajenas por un medio técnico. Por lo tanto, se excluyen la grabación de las conversaciones por uno de los interlocutores, ya que nos encontramos con una grabación de la propia comunicación⁵⁵. Según el Tribunal Constitucional la interceptación de las comunicaciones queda salvaguardada cuando se trata de una intervención externa o ajena a través de un medio técnico de uso, es decir, la persona que graba una conversación de otros vulnera el secreto de las comunicaciones⁵⁶.

De este modo, resultaría ilógico pretender ejercitar este derecho a quien formó parte del proceso comunicativo, pues lo que garantiza el 18.3 CE es la impenetrabilidad por parte de terceros, ya que los interlocutores no son ajenos a la comunicación, sino los principales y únicos participantes de la comunicación.

Por otra parte, y de manera acertada, Zoco Zabala afirma que se excluyen del ámbito de protección aquéllos supuestos en que el mismo interlocutor permita acceder a terceros a sus propias conversaciones o comunicaciones telemáticas. En tal caso no estaríamos ante una violación del secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas entraran en la esfera íntima del interlocutor y pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el art 18.1 CE.

Esto indica, que la grabación por uno de los comunicantes de la conversación telefónica no conculca secreto del artículo 18.3 CE, ya que se tratan de comunicaciones propias, de modo que si se impusiera un deber de secreto a cada uno de los interlocutores, se terminaría vaciando de sentido, ya que no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad. Los resultados a que podría llevar esta imposición indiscriminada de una obligación de silencio, es irracional y contradictorio con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana⁵⁷.

⁵⁵ Algunos autores consideran que la grabación de las conversaciones por el interlocutor supone una vulneración del secreto de las comunicaciones pues consideran que el artículo 18.1 CE protege un objeto similar cual es el poder de control por el sujeto sobre la información que emite o la autodeterminación informativa. López Ortega, J. J., "La protección de la intimidad en la investigación penal: necesidad y proporcionalidad de la injerencia como presupuestos de validez", *Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar*, CGPJ, núm. 20, 1996, p..294

⁵⁶ STC 114/1984, de 29 de noviembre.

⁵⁷ STC 114/1984, de 29 de noviembre.

En relación a lo anteriormente desarrollado, puede surgir una cuestión: ¿se vulnera el secreto de las comunicaciones cuando uno de los comunicantes graba la conversación y la presenta como prueba de la comisión de un delito? Si nos atenemos a lo explicado, la grabación propia de las conversaciones telefónicas no vulnera el artículo 18.3 CE, sin embargo debemos tener en cuenta el consentimiento del afectado. En este caso, el otro interlocutor para no vulnerar su esfera íntima personal.

El fundamento se basa en que, a diferencia de la revelación consentida de datos propios de forma voluntaria como por ejemplo en una conferencia, documental, biografía o una clase grabada con un único protagonista frente a varios oyentes, los datos revelados que tienen su origen en una conversación telefónica implica dos personas: emisor y receptor. En este caso, sería preciso el consentimiento de los dos para poder revelar su contenido⁵⁸.

Tampoco, se lesiona el secreto de las comunicaciones cuando se produce una audición policial a través de radioteléfonos, teniendo en cuenta que no se realizó ninguna operación para llevar a cabo esas escuchas. El razonamiento es sencillo, las conversaciones que se mantiene por radioteléfono son susceptibles de ser escuchadas por cualquier persona que se encuentre a los alrededores y no supone vulneración alguna del artículo 18.3 CE (*STS 591/2001, de 1 abril (Sala de lo Penal)*)

En cuanto, a la intervención acústica aunque el fin es el mismo “interceptación de las comunicaciones”, el artículo 18.3 CE protege la intervención ajena de las comunicaciones ajenas realizadas por medios técnicos de uso o soporte en papel a través de correo postal o por cualquier otro medio, por lo tanto, no incluye la comunicación directa entre personas a través de la palabra, el gesto o la expresión corporal.

Según Zoco Zabala las conversaciones directas intervenidas no quedan protegidas por el secreto de las comunicaciones; podría pensarse que son propias del art 18.1 CE en relación con el derecho fundamental a la intimidad. Pero como es de esperar este derecho fundamental no prevé la posibilidad de intervención acústica por medio de una resolución judicial, ni tampoco el legislador está habilitado para regular el contenido de este derecho⁵⁹.

⁵⁸ STC 56/2003, de 24 de marzo; STS 713/1995, de 30 de mayo (Sala de lo penal); 1713/1993 de 9 de julio (Sala de lo Penal)

⁵⁹ Así pues, se verifica que dicha delimitación tampoco se colige de la LO1/1982, de 5 de mayo, de Protección del derecho al Honor, a la intimidad personal y Familiar, y a la Imagen que lo configura, cuyo artículo 7.1 prohíbe expresamente el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las

Para finalizar con lo propuesto, el artículo 18.1 CE carece de la posibilidad de una medida judicial para intervenir las conversaciones directas, en caso de ser así es necesario una reforma de dicho artículo para determinar las condiciones y supuestos similares al del 18.3 CE. Justamente, si la ley es la única habilitada por la constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos⁶⁰.

personas, sin aludir a una posible intervención judicial de las mismas. Zoco Zabala, Cristina, *Nuevas tecnologías...*, ob. cit., pág. 67.

⁶⁰ STC 292/2000, de 30 de noviembre

IV. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES: EL CASO DEL TELÉFONO MÓVIL

Actualmente, los teléfonos móviles se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida diaria ya que nos ofrecen funciones como: llamadas de voz, grabación de voz, mensajes de textos, acceso a Internet, y comunicaciones con terceros con soporte para intercambio de archivos, fotos, videos, etc. Son funciones que forma parte de las comunicaciones, por lo tanto, se encuentran dentro del contenido del 18.3 CE, sin embargo, también pueden afectar además a otros derechos fundamentales como el honor, intimidad o el derecho a la protección de datos personales.

Por consiguiente, es necesaria una persecución de aquéllos nuevos delitos surgidos al amparo del teléfono móvil o correo electrónico, ya que son medios que para su funcionamiento necesitan de un medio técnico para producirse, propios del artículo 18.3 CE.

El uso generalizado de estos dispositivos constituye un escenario de enorme complejidad jurídica. Los operadores disponen de grandes bases de datos donde se acumulan todas las informaciones relacionadas con el tráfico de las terminales individuales incluidas la geoposición del usuario. Ello incluye pues información sobre llamadas y mensajes entrantes y salientes⁶¹.

Ante esta situación, el Tribunal Constitucional, ha determinado la necesidad de una autorización judicial en virtud del artículo 18.3 CE para posibles intervenciones de los correos electrónicos o para la observación de las llamadas entrantes y salientes del titular del teléfono móvil⁶².

Cabría preguntarse: ¿el artículo 18.3 CE protege la información de llamadas entrantes y salientes, previa incautación del teléfono? Es claro que no se encuentra dentro del rango de protección del secreto de las comunicaciones, ya que dicha información se encuentra fuera del proceso comunicativo; el artículo 18.3 CE protege la información de las comunicaciones a través de un medio técnico, mientras dure la comunicación una vez terminada, la información almacenada no será objeto de su protección. Puesto que la comunicación debe entenderse como un “proceso de transmisión” de mensajes que se desarrolla en un periodo de tiempo determinado, durante el cual se produce la protección específica otorgada por el artículo 18.3 CE. Una vez culminado el proceso, la información transmitida queda fuera del ámbito de

⁶¹ Zoco Zabala, Cristina, *Nuevas tecnologías...*, ob. cit., p. 79.

⁶² STC 170/2013, de 7 de octubre

protección del secreto de las comunicaciones, por consiguiente, no significa que lo comunicado no sea susceptible de tutela, pero lo será al amparo de un derecho diferente al serlo también el objeto.

En principio, el Tribunal Constitucional afirmó que el artículo 18.3 CE además de proteger el proceso de comunicación incluye también el mensaje materializado en algún objeto físico o medio material⁶³. Frente a esta perspectiva la doctrina concluyó que la aprehensión en soporte físico en que consta el contenido de la comunicación no se encuentra en el ámbito del derecho del secreto de las comunicaciones, sino en el del derecho a la intimidad⁶⁴.

Por otra parte, cuando las compañías telefónicas entregan a la policía un listado de llamadas y sus datos, no quedarán protegidas por el secreto de las comunicaciones, a menos, que dicha entrega sea fruto de una intervención. Por lo general, la medida de intervención permite a la policía bajo la autorización del juez, obtener todos los datos del sospechoso y personas relacionados con los hechos investigados, sin embargo, no quedaría protegidos por el secreto de las comunicaciones aquellos datos personales de llamadas telefónicas y más información de ciudadanos ajenos a la medida de intervención determinada por el juez.

Recapitulando, el artículo 18.3 CE tiene como objeto, el secreto de las comunicaciones, que se basa en la protección de un “agere licere” de los ciudadanos, libre de injerencias de los poderes públicos y particulares; a su vez, garantiza la interceptación de las comunicaciones ajenas a través de un artificio técnico bajo previa resolución judicial. Por este motivo, la posibilidad de autorizar judicialmente una intervención de una comunicación forma parte del contenido esencial del artículo 18.3 CE.

De hecho, tanto la intervención de las comunicaciones y la resolución judicial forma parte de los límites internos, ya que es indispensable proteger el derecho a la libre comunicación por medio de un instrumento técnico. Así pues, los límites internos forman parte de un todo, como bien lo explica el Tribunal Constitucional. El contenido esencial de un derecho fundamental es el establecido por la Constitución y se conforma por: la titularidad (quien disfruta de este derecho), objeto (conjunto de expectativas de conducta sobre la que se proyecta la garantía constitucional), su contenido técnico (el haz de facultades y poderes jurídicos que son necesarios para

⁶³ STC 114/1984, de 29 de noviembre.

⁶⁴ López-Fragoso Álvarez, T., *Las intervenciones telefónicas en el proceso penal*, Madrid, 1991, p 50 y 51.

que el conjunto de expectativas de conducta que componen el objeto del derecho fundamental puedan ser realizados efectivamente por su titular), y, claro está, los límites internos y la habilitación para los límites externos⁶⁵.

Queda claro que la interceptación ajena realizada a través de un dispositivo técnico bajo una resolución judicial motivada deja fuera de su perímetro de protección a: grabaciones ajenas que no se hubiera empleado un medio técnico, como también la grabación de la propia conversación no consentida, o si fuese consentida, utilizada para fines que el interlocutor no permitió. Cómo ya se ha mencionado anteriormente son cuestiones propias del art 18.1 CE.

Por su parte, la intervención del teléfono móvil queda parcialmente protegida solo, durante el proceso de comunicación; no siendo así los del registro de llamadas entrantes y salientes ya que, no existe una intervención de las comunicaciones, debido a que la comunicación ya concluyó o no llegó a efectuarse⁶⁶.

⁶⁵ STC 292/2000, de 30 de noviembre.

⁶⁶ Según la Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, define «llamada infructuosa» como una comunicación que se ha realizado con éxito pero sin contestación, se extiende a aquellos supuestos en que se han realizado todos los actos necesarios para llevar a cabo una comunicación y esta no ha sido posible por causas ajenas a la voluntad del emisor. Desde esta perspectiva, las llamadas perdidas quedan incluidas dentro del ámbito del 18.3 CE al considerarse iniciado, el proceso de comunicación. Ahora bien, si se entendiese que constituyen sólo el presupuesto de la comunicación sin que forme parte de la misma, su tutela quedaría bajo el derecho a la protección de datos de carácter personal. López-Baraja, A., *El derecho al secreto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2011, p.45-49.

V. CONCLUSIONES

La Constitución Española, señala en su artículo 18, inciso 3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial”. Carece de una definición de “comunicación” ya que se puede interpretar de diferentes maneras, pero gracias a la intensa labor jurisprudencial y doctrinal se puede afirmar que protege toda transmisión de información entre emisor y receptor que se realice a través de un artificio técnico.

Los cambios en las últimas décadas y, en especial, de la informática y la telefonía como nuevos instrumentos de comunicación, abren un enorme marco de posibilidades, y como consecuencia, una necesidad que se adapte a los sucesivos cambios tecnológicos para que se cumpla esa finalidad.

El objeto del derecho no se refiere al contenido del mensaje sino al “proceso de comunicación” que está acotado en el tiempo. La protección o libertad de las comunicaciones se cumple considerando que los contenidos de la misma son secretos, independientemente de lo que traten. Estamos ante una garantía formal, no material.

El contenido del artículo 18.3 CE posee una doble vertiente: por un lado, garantiza la libertad de las comunicaciones, ese derecho de toda persona a utilizar los medios que la tecnología ofrece para transmitir información. No obstante, por otro lado, también permite la intervención de las comunicaciones y delimita el contenido del secreto a través de un medio técnico mediante la autorización judicial que sea constitucionalmente conforme.

El secreto de las comunicaciones, tratándose de un derecho ligado a la esfera privada y vinculado directamente a la dignidad humana, concede titularidad a toda persona con independencia de su lugar de origen y, por lo tanto, no cabe establecer limitaciones específicas para el caso de los extranjeros.

La jurisprudencia y la doctrina han coincidido en señalar que las personas jurídicas también son titulares del derecho. Este entendimiento, que es comúnmente aceptado, resulta de la interpretación jurisprudencial, aunque obviamente la persona jurídica no puede mantener comunicaciones si no es a través de personas físicas.

La LOMLECrim, pretende completar las lagunas del antiguo artículo 579 LECrim, brindando una cierta independencia a las comunicaciones telegráficas, y concretando puntos de las comunicaciones postales, incluyendo burofaxes y giros. Por lo que respecta a las comunicaciones telefónicas y telemáticas, como el correo electrónico o la telefonía móvil, comparten una finalidad: proteger el proceso de comunicación con independencia del contenido, en este caso telefónica. Pero si interpretamos más allá

de su literalidad se entiende que se garantiza la frecuencia por la que se desarrolla la comunicación como también la identidad de los comunicantes.

El derecho persigue evitar la injerencia de los poderes públicos o particulares en el proceso comunicativo a través del conocimiento, relación y análisis de las circunstancias que engloba una comunicación.

Respecto a otros medios de comunicación, como el correo electrónico, debe entenderse que todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública constituye una forma de comunicación privada, por lo que debe reconocerle el mismo tratamiento jurídico. Ahora bien, en su intervención deben regir las mismas garantías legales que para cualquier comunicación. Debe realizarse durante el proceso de comunicación y no una vez concluido este.

Una vez finalizado el proceso comunicativo, cualquier injerencia posterior afectará se sitúa dentro del artículo 18.1 CE.

La intervención judicial forma parte del derecho del artículo 18.3 CE, por lo que la autorización del juez es siempre indispensable. La motivación judicial debe ser conforme a derecho, según el artículo 579 LECrim. Y se satisface cuando la resolución judicial contiene razones que permiten conocer cuáles son los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, que varían dependiendo de los requisitos legales establecidos para cada incidencia procesal.

La verificación sobre la proporcionalidad de toda medida que afecta a un derecho fundamental exige tres criterios: idoneidad, necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Así pues, se determina si la medida es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes en conflicto.

Sin embargo, sigue latente el problema de regular la intervención de las comunicaciones. En varias ocasiones España ha recibido llamadas de atención por parte del TEDH al no preverse suficientemente las garantías que precisan la extensión y las modalidades del ejercicio del poder de apreciación de las autoridades.

En los últimos años se ha planteado en el seno del Ministerio de Justicia la elaboración de una ley procesal penal como texto único que sustituya a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es un propósito que no se ha visto coronado en los dos últimos intentos o borradores de Proyectos de Ley.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Andrés Ibáñez, P., *La función de las garantías en la actividad probatoria*, Madrid, CPGJ, 2005, p. 215-242.

Bastida Freijedo, F.J., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978*, Tecnos, Madrid, 2004.

Díaz Revorio, F., "El derecho fundamental de las comunicaciones", *Revista de la Facultad de Derecho*, núm. 59, 2006.

Díez Picazo, *Sistema de derechos fundamentales*, Civitas, Pamplona, 2005.

Enrique Belda Pérez-Pedrero, "El derecho al secreto de las comunicaciones", *Parlamento y Constitución*, núm. 2, Castilla-La Mancha, 1998.

Elvira Perales, A., *El secreto de las comunicaciones*, Iustel, Madrid, 2007.

Jiménez Campo, J., *Derechos fundamentales. Concepto y garantías*, Trotta, Madrid, 1999.

Jiménez Campo, "La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, Madrid, 1987.

Llaneza González, P., *Internet y comunicaciones digitales*, Editorial Bosh, Barcelona, 2000.

López Ortega, J. J., "La protección de la intimidad en la investigación penal: necesidad y proporcionalidad de la injerencia como presupuestos de validez", *Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar*, CGPJ, núm. 20, 1996.

López-Fragoso Álvarez, T., *Las intervenciones telefónicas en el proceso penal*, Colex, Madrid, 1991.

López-Baraja, A., *El derecho al secreto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías*, La Ley, Madrid, 2011.

Zoco Zabala, C., *La intervención judicial de las comunicaciones ¿Privadas?*, Aranzadi, Pamplona, 2014.

Zoco Zabala, C., *Nuevas tecnologías y control de las comunicaciones*, Aranzadi, Navarra, 2015.

<https://www.bbva.com/es/cuantos-whatsapp-envian-minuto/>. (a. 28-5-2019).

VII. JURISPRUDENCIA CITADA.

STEDH del 24 de abril de 1990, caso Kruslin contra Francia

STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5.

STC 123/2002, de 3 de abril.

STC 123/2002, de 11 de marzo.

STC 170/2013, de 7 de octubre.

STC 114/1984 de 19 de noviembre.

STC 114/1984 29 de noviembre. FJ 3.

STC 114/1984, de 29 de noviembre.

STC 230/2007, de 5 noviembre.

STC 13/1985 de 31 de enero.

STC 49/1999, de 5 de abril.

STC 123/1997, de 1 de julio.

STC 253/2006, de 11 de septiembre.

STC 164/2005, de 20 de junio.

STC 87/2000, de 27 de marzo.

STC 9/201, de 28 de febrero del 2011.

STC 169/2013, de 7 de octubre.

STC 28 /1994, de 27 de enero.

STC 195/2009, 29 de septiembre;

STC 79/2008, de 14 de julio.

STC 77/2008, 7 de julio.

STC 205/2005, de 18 de junio.

STC 114/1984, de 29 de noviembre.

STC 81/1998, de 2 de abril

STC 49/1999, de 5 de abril

STC 299/2000, de 11 de diciembre

STC 184/2003, de octubre.

STC 49/1999, de 5 de abril.

STC 86/1995, de 6 de junio.

STC 54/1996 de 26 de marzo.

STC 81/1998, de 2 de abril.

STC 13/1985, de 31 de enero.

STC 114/1984, de 29 de noviembre.

STC 114/1984, de 29 de noviembre.

STC 56/2003, de 24 de marzo.

STC 292/2000, de 30 de noviembre.

STC 170/2013, de 7 de octubre.

STC 114/1984, de 29 de noviembre.

STC 292/2000, de 30 de noviembre.

STS 713/1995, de 30 de mayo (Sala de lo penal).

STS 1713/1993 de 9 de julio (Sala de lo Penal).

STS 301/2013, de 18 de abril.

STS 130/2007, de 19 de febrero.

Auto del TS ,18 de junio.